

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACION	
DEMANDANTE	GERARDO GEOVANI CORDOBA PAZ
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-019-2017-00788-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de vejez con régimen de transición, semanas en mora, aproximación de semanas.
DECISIÓN	Confirma.

*Medellín, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)*

*Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.*

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”; en concordancia con los acuerdos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **GERARDO GEOVANI CORDOBA PAZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto,

de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 017**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I. – ASUNTO**

Es materia de la Litis, resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que profirió el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 17 de julio de 2019, dentro del proceso referenciado.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, lo siguiente: El actor fue cotizante activo del Instituto de Seguros Sociales (hoy COLPENSIONES), para los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte, de manera discontinúa, según consta en la Historia Laboral expedida por Colpensiones; así mismo, La POLICIA NACIONAL expidió certificación para bono pensional, en formatos 1,2 y 3 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por los tiempos prestados por el demandante a dicha entidad entre el 1 de julio de 1976 y el 3 de enero de 1979 en calidad de AGENTE; el demandante nació el día 2 de septiembre de 1953, de lo que se deduce que cumplió los 60 años de edad el mismo día y del año 2013; radicó solicitud de pensión de vejez, la que fue contestada por medio de la Resolución SUB 145615 del 31 de julio de 2017, negando la prestación económica afirmando que el demandante solo contaba con 891 semanas cotizadas y que, de acuerdo al artículo 9 de la ley 797, el requisito de semanas mínimo requerido en el año 2013 era de 1250 semanas.

Señala el introductorio que, contrario a lo indicado en la resolución en mención, es beneficiario del régimen de transición, ya que para el 1 de abril de 1994 contaba con 41 años de edad y para la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005 ( 25 de julio de 2005) contaba con 766.26 semanas, por lo que debía extenderse dicho régimen hasta el año 2014 (31 de diciembre), tal como lo indica el parágrafo transitorio 4 de la normativa mencionada; respecto a lo manifestado por la demandada en la resolución referida, en cuanto al número

de semanas, señala que no se están teniendo en cuenta los siguientes periodos:

- En la historia laboral válida para prestaciones económicas expedida por el ISS (hoy COLPENSIONES), no se contabilizaron las semanas que laboró con el empleador JOAQUIN MESA OCHOA N.º aportante 02017106527, en los periodos comprendidos entre el 10 de febrero de 1989 al 28 de marzo de 1989, que equivalen a 48 días (6.857 semanas), por la deuda que presentó dicho empleador por esos periodos con el ISS, tiempos que tienen la anotación de deuda, por lo que deben contabilizarse.

- El actor laboró al servicio de la Policía Nacional por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1976 y el 3 de enero de 1979 en calidad de AGENTE, tiempo que asciende a 130.99 semanas que también deben sumarse para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez.

- Y se deberán convalidar las inconsistencias que presenta la más reciente historia laboral del demandante en los siguientes periodos: Diciembre de 1995, 1 día (Se reportan 26 y aparecen cotizados 27); Julio de 1996, 19 días ( Aparece debidamente pagada la cotización por \$12.152 por el IBC reportado de \$90.013, que equivale a 19 días pero aparecen en ceros las casillas de días reportados y cotizados); noviembre de 1998, 25 días, (Aparecen reportados 30 días, pero solo suman 5 días como cotizados por mora); Abril y mayo de 2001, 2 días ( Aparecen reportados 30 días en cada ciclo , pero solo suman 29 como cotizados por mora), para un total de 47 días, que equivalen a 6,714 semanas)

Indica la demanda que, para el 31 de diciembre de 2014, el actor tendría: 852.71 semanas reportadas en la historia laboral, 6,857 semanas que no se contabilizaron en la historia laboral y aparecen en mora, que corresponden al empleador JOAQUIN MESA OCHOA, las semanas que laboró al servicio de la Policía Nacional por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1976 y el 3 de enero de 1979 en calidad de AGENTE = 130.99, y las semanas inconsistentes en la historia laboral = 6.714, para un total de 997.27. Que en la actualidad el demandante cuenta con 997.27 semanas cotizadas hasta el 31 de diciembre de 2014, cuando la norma exige para acceder a la pensión de vejez

un mínimo de 1000 semanas, es decir, le faltan 2.72 semanas para acreditar el requisito.

Considera que, respecto al tema de la falta de semanas para el reconocimiento de alguna prestación, como en este caso, los Altos Tribunales han afirmado que el juez puede abstenerse de aplicar el tenor literal de una norma y apartarse de una interpretación exegética y, puede por el contrario desentrañar el querer del legislador y aplicar principios constitucionales como la equidad, justicia y el principio de proporcionalidad y reconocer una pensión sin el cumplimiento de la totalidad de semanas exigidas en la norma aplicable, cuando, como en este caso, sería desproporcionado no reconocer la prestación por la carencia de una mínima fracción, inferior inclusive al 98% de la prestación económica, más aún, cuando se trata de una persona de la tercera edad; que al momento de realizar el estudio de la PENSIÓN DE VEJEZ, COLPENSIONES omitió tener en cuenta la actual jurisprudencia Constitucional que permite la sumatoria de tiempo público no cotizado a ninguna caja de previsión social y el tiempo cotizado directamente a COLPENSIONES para el estudio de la prestación pensional bajo el supuesto normativo del Decreto 758 de 1990, ya que así el demandante acreditaría ser beneficiaria de la prestación por ser ésta la interpretación más favorable.

### **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que CONDENE a COLPENSIONES, a que le sea reconocida y pagada al señor GERARDO GEOVANI CORDOBA PAZ, la Pensión de Vejez, a la cual tiene derecho de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de manera retroactiva a partir del 31 de diciembre de 2014 - fecha en que cumplió los requisitos o, SUBSIDIARIAMENTE a partir de la última cotización o desde la presentación de la demanda por haber sido aplicación de preceptos constitucionales tales como el principio de equidad y proporcionalidad. Que se CONDENE a COLPENSIONES, al pago de la citada pensión con las mesadas adicionales de Junio y Diciembre que se hayan causado y que se sigan

causando, pensión que se deberá reconocer en la cuantía establecida en el artículo 20, II, del Decreto 758 de 1990, pero sin ser inferior al SMMLV para cada año; Que se ordene y liquiden los respectivos intereses moratorios de todas sumas que declare causadas, de acuerdo con el Artículo 141 de la citada ley 100 de 1993; que se condene a la demandada a que dichas sumas de dinero sean debidamente indexadas, y a las costas y agencias en derecho; también, a lo que ultra o extra petita se declare probado dentro del proceso.

#### **IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA**

**COLPENSIONES** (fls. 40 al 46), a través de su apoderado judicial, manifestó, frente a los supuestos fácticos narrados por la activa, que son ciertos aquellos que aluden a la edad del demandante, su afiliación al ISS hoy Colpensiones, el tiempo de servicio en la Policía Nacional, la solicitud pensional radicada ante COLPENSIONES, y la respuesta negativa obtenida a través del acto administrativo anunciado con la demanda, indicando no constarle los demás hechos, o ser apreciaciones subjetivas del apoderado del demandante. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de vejez; improcedencia de intereses de mora; improcedencia de la indexación; prescripción; buena fe; imposibilidad de condena en costas; compensación; y la genérica”*.

#### **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En el fallo objeto de apelación, la juez *A Quo* en audiencia pública de juzgamiento celebrada el 17 de julio de 2019 ABSOLVIÓ a la demandada de todas las pretensiones de la demanda, condenando en costas al actor, fijando las correspondientes agencias en derecho

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que el demandante, en razón de su edad, se hizo beneficiario del régimen de transición pensional previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, y logró conservar tal beneficio hasta el año 2014, por contar con más de 750 semanas

cotizadas o servidas a la fecha en que entró en vigencia el acto legislativo 01 de 2005.

En cuanto al régimen anterior aplicable al demandante, indica que, si bien la Corte Suprema de Justicia ha señalado la imposibilidad jurídica de sumar tiempos públicos y privados con el fin de cumplir con el requisito de tiempo exigido por el Decreto 758 de 1990, la Corte Constitucional en la sentencia SU 769 de 2014 estableció la posibilidad de tal sumatoria, posición que acoge ese despacho.

Manifiesta, con relación al período comprendido entre el 10 de febrero de 1989 al 28 de marzo de 1989, en la historia laboral visible a folios 53 a 69 se observa que existe novedad de ingreso y de retiro del empleador Joaquín Mesa, con anotación “deuda”, semanas que no fueron tenidas en cuenta en el conteo de semanas para el cumplimiento de requisitos, indicando la falladora que, si bien existe mora, del material probatorio allegado al proceso no se colige que haya existido relación laboral del actor con el referido señor, para ese período, por lo que no es posible valorarlo endilgando las consecuencias de no cobro de esos aportes a Colpensiones ya que el único soporte que alega el demandante de la relación laboral son unas historias laborales aportadas que, a criterio del despacho, no son medios probatorios que acrediten ese hecho.

Sobre los demás períodos a que alude el demandante que no se tuvieron en cuenta, señala la a quo que le asiste razón a éste en el día faltante de diciembre de 1995 (0,14 semanas); que en julio de 1996 deben tenerse en cuenta 30 días (4,29 semanas), ya que su pago fue aplicado a períodos anteriores, incurriendo la entidad en la prohibición de imputación de pagos; también valida 25 días (3,58 semanas) de noviembre de 1998 pues se reportaron 30 días y se indican 5 días cotizados, sin que exista novedad de retiro; de abril y mayo de 2001, valida 2 días (0,286), en atención a que se reportaron en cada ciclo 30 días y solo se tuvieron como cotizados 29 días. Todo lo anterior, para un total de 8,29 semanas que se deben tener en cuenta para efectos de establecer el requisito de la densidad de semanas.

Manifiesta que, en atención a que el actor se afilió al ISS en 1979, tiene derecho a que se le aplique el numeral 12 del Decreto 758 de 1990; que el demandante no cumple con la primera hipótesis que trae la norma, 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima (60 años) toda vez que entre el 2 de septiembre de 1993 y 2 de septiembre de 2013, solo cuenta con 337 semanas cotizadas; que tampoco cumple con las 1000 semanas en cualquier tiempo, pues, si bien cuenta con 1031 semanas para diciembre de 2016 fecha de la última cotización, que corresponden a las con 131 semanas de tiempo de servicio en la Policía Nacional, 891,71 semanas cotizadas al ISS, y 8, 29 semanas que se validan en esta oportunidad, para el 31 de diciembre de 2014, fecha en que terminó el régimen de transición, solo cuenta con 992, 4 semanas.

Ante lo solicitado por el demandante en el sentido que se aproximen las semanas por razones de equidad, recuerda la juez de instancia lo indicado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias SL982 de 2019 y SL2757 de 2015, resaltando que la aproximación de semanas se realiza del 0,5 en adelante, al siguiente decimal, por lo que en el presente caso no es procedente la aproximación solicitada por el actor.

## **VI. APELACIÓN**

La parte demandante, a través de su apoderado judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, sustentándolo en los siguientes términos:

Señala que no hay discusión en cuanto a que el actor es beneficiario del régimen de transición, y que para el 31 de diciembre de 2014 contaba con 992,4 semanas, como lo indicó la señora juez, sin tener en cuenta los períodos cotizados, o que se prueban en la historia laboral, la que no fue tachada de falsa por la parte demandante, en la cual tuvo una relación laboral con el señor Joaquín Mesa Ochoa, que equivale a 14,28 días (sic), que son 6,85 semanas; que la señora Juez manifiesta que la parte demandante tiene la obligación de probar la relación laboral, pero que en la historia laboral del ISS hoy Colpensiones, se está aceptando dicha relación y que se encuentra en mora;

que, por lo tanto, es la entidad la que debió hacer el cobro coactivo al empleador, el que está establecido desde el estatuto del ISS y, posteriormente, con la ley 100 de 1993. Que con esto se prueba que el actor tiene 6,85 semanas, más 992,4 semanas, el demandante cuenta con 999.2 semanas en toda su vida laboral, por lo que pide al tribunal que se le tenga en cuenta las sentencias de aproximación, dado que la Corte Suprema de Justicia, en sentencias ha manifestado que se aumenta es la centésima o la décima; que también se ha observado que para pensiones de invalidez y sobrevivencia, que son 50 semanas o 25 semanas, si el 100% son las 50 semanas, las sentencias al subir de 48.5 semanas, sería un 98%; que en este caso, si se toma en cuenta que el 100% es 1000, para 999 semanas sería casi un 99%, que cumpliría el demandante para adquirir el derecho; que, así mismo, no se estaría afectando la sostenibilidad financiera del sistema que trae la constitución y el acto legislativo 01 de 2005; por el contrario, la ley 100 de 1993, en su artículo 2º, establece unos de solidaridad, de eficiencia, de universalidad, por lo que debe tenerse en cuenta que el demandante con 999,2 semanas y teniendo en cuenta los tiempos que se están manifestando del año 1989, no se estaría afectando el principio de sostenibilidad financiera, por lo que debe aplicarse el principio de solidaridad.

### **Alegatos de conclusión.**

Dentro del término concedido, el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. Néstor Eduardo Pantoja Gómez, portador de la T.P. N° 285.871 del C.S. de la J., a quien se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario, presentó sus alegaciones de instancia, exponiendo básicamente que al demandante no le asiste derecho a la pensión de vejez que reclama, por cuanto al revisarse su historia laboral, se evidencia que este afiliado al 25 de Julio de 2005 no registra 750 semanas, pues cuenta con 621.31 semanas de cotización, razón por lo cual, no es aplicable la extensión del régimen de transición y por consiguiente no sería posible reconocer la prestación conforme al Decreto 758 de 1990, toda vez que la edad de pensión (60 años) la acreditó el 02 de septiembre de 2013, fecha posterior a la cobertura del régimen, de esa manera se tiene que los tiempos



cotizados a la Policía Nacional no se tendrán en cuenta para el estudio de la prestación conforme al Decreto 758 de 1990. Solicita en consecuencia, la revocatoria de la sentencia de primera instancia.

## **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

**Naturaleza jurídica de la pretensión.** -Pensión de vejez, régimen de transición, semanas en mora, aproximación de semanas. Teniendo en cuenta los argumentos planteados en la apelación, la controversia jurídica que debe resolverse consiste en determinar si el demandante reúne o no el requisito de semanas cotizadas para causar el derecho a una pensión de vejez, bajo el régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el art. 12 del acuerdo 049 de 1990, y solo en caso de prosperar dicha pretensión, pasará la sala a determinar el valor de la mesada pensional y del retroactivo pensional adeudado, y si es procedente la condena por intereses moratorios o, en subsidio, la indexación de las condenas.

### **Régimen de transición**

El régimen de transición pensional que reclama para sí la demandante es una figura jurídica creada por el legislador para proteger los intereses, derechos y beneficios de las personas que estaban próximas a pensionarse a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones creado por la Ley 100 de 1993, buscando mantenerles las condiciones de su régimen inicial sin hacerle el cambio a las nuevas estipulaciones de la ley 100 de 1993, en lo referente a la edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y monto de la pensión.

Así lo dispuso el artículo 36 de la citada Ley quien dirigió el beneficio normativo a los trabajadores, que a la fecha de entrada en vigencia del SGP, que para el sector privado fue el 1° de abril de 1994, cumplieren una de las siguientes condiciones: Mujeres con treinta y cinco (35) o más años de edad; hombres con cuarenta (40) o más años de edad, hombres y mujeres que, independientemente de la edad, acrediten quince (15) años o más de servicios cotizados a esa fecha concreta, conforme lo señala el artículo 151 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, se debe tener en cuenta además, la reforma que al artículo 48 de la Constitución Política de 1991, le introdujere el Acto Legislativo 01 de 2005, en su artículo 1° párrafo transitorio número 4, el cual estableció que dicho régimen, no podría extenderse más allá del 31 de Julio de 2010; excepto para aquellos trabajadores que estando en dicho régimen, tuvieran cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del citado Acto Legislativo, esto es, el 29 de Julio de 2005, a los cuales se les mantendrían dichas ventajas pensionales hasta el año 2014 (31 de Diciembre).

De otro lado, sobre la acumulación de tiempos públicos y privados bajo el Acuerdo 049 de 1990, resalta la Sala que, para la calenda en que se profirió la sentencia de primera, se encontraba vigente en el máximo órgano de cierre de la especialidad laboral la interpretación que solo permitía la pretendida acumulación de tiempos públicos y privados con Decreto 758 de 1990, bajo la premisa de que fuere esa la única forma de que el asegurado realizare su acceso a la pensión (Sentencia SU-769 de 2014 de la Corte Constitucional).

Cabe señalar que en la sentencia SU 769 de 2014, la Corte Constitucional fue clara en indicar la viabilidad de acumular tiempos públicos y privados bajo Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del Régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al concluir en dicha sentencia:

*“9.1. El cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la Ley 100 de 1993 precisamente para dar solución a la desarticulación entre los diferentes regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores para acceder a la pensión de vejez.*

*De conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados en la parte considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestación es posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.*

*9.2. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por ser la postura que mejor se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulación es válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.*

*9.3. Finalmente, también es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga prestacional.”*

No obstante, actualmente la Sala de Casación Laboral, a partir de las sentencias SL1947 y SL1981 de 2020, y posteriormente, en lo respectivo a la reliquidación pensional, en la SL2557, Radicación 72.425 de 2020, recogió su anterior postura, alineándose con la Corte Constitucional, partió de la aplicación de principios constitucionales (artículos 2 y 25 de la Constitución Política); teniendo en cuenta que, durante la trayectoria laboral, las personas pueden estar unos tiempos en el sector público o en el sector privado, dado que ello hace parte de las contingencias del mercado laboral; determinando que, lo relevante es que el Estado permita tener en cuenta lo uno y lo otro, en el marco de la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, y viabilizó la sumatoria, bajo Decreto 758 de 1990, a los beneficiarios del régimen de transición pensional, incluso para la reliquidación pensional.

El eje axial de las citadas providencias, asumió que el régimen de transición pensional, al proteger expectativas legítimas, propugnó por evitar que los cambios legislativos en materia pensional, resultaran abruptos para los ciudadanos, y que, al conservar los conceptos edad-tiempo-monto del régimen pensional anterior, permitía que la forma de computar las semanas para estas prestaciones se rigiera íntegramente por el literal f del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que dispone expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así estos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social, al tratarse de la esencia del trabajo humano.

Esta nueva visión, que reúne una mirada constitucional al asunto, desde el trabajo, el principio de favorabilidad y la estructura del sistema de seguridad social, conlleva un *“cambio de criterio jurisprudencial, acorde a mandatos superiores y a la defensa del derecho a la seguridad social en tanto garantía fundamental de los ciudadanos, así reconocida por diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que, además de estar ratificados por Colombia, hacen parte del denominado ius cogens...”*.

Así, concluye la Corte que, *“conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos”,* como alternativa extensiva, *“a la reliquidación de la pensión de vejez...”*.

## **CASO CONCRETO**

Se encuentra acreditado en el sub lite, que el actor nació el 2 de septiembre de 1953, según da cuenta su documento de identidad obrante a folios 12, por lo que contaba con 41 años de edad al 1° de abril de 1994, fecha en que cobró vigencia el sistema general de pensiones entronizado por la ley 100 de 1993, circunstancia que le permitió acceder, en principio, al régimen de transición pensional previsto en el art. 36 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta el material probatorio allegado al proceso, concretamente la HISTORIA LABORAL del actor en Colpensiones (Antes ISS),

y la certificación de Información laboral expedida por la Policía Nacional, visibles a folios 54 a 70 y 29 a32, respectivamente, sin contar las semanas respecto de las cuales el demandante pide se tengan en cuenta para acreditar el requisito de densidad de semanas, se evidencia que el señor Córdoba Paz tiene en su haber más de 750 semanas al 29 de julio de 2005, por lo que, en su caso, el régimen de transición pensional que estableció el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, como bien lo coligió la Juez de primer grado.

Cabe señalar que, siendo el Decreto 758 de 1990 el régimen anterior aplicable al actor, éste debe acreditar los requisitos para acceder a la pensión de vejez establecidos en el artículo 12 de dicha normatividad, esto es, 60 años de edad por ser hombre, 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, o 1000 semanas en cualquier tiempo.

Ahora, de acuerdo a la historia laboral del actor en Colpensiones (Fol. 54 y ss) , el demandante tiene en su haber 891,71 semanas cotizadas por diferentes empleadores del sector privado, dentro del lapso comprendido entre el 1 de agosto de 1979 al 31 de diciembre de 2016, contando, para el 31 de diciembre de 2014, fecha en que feneció para el actor el Régimen de Transición pensional establecido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, con **851,71 semanas cotizadas al ISS, hoy Colpensiones**, a las cuales se debe sumar el tiempo de servicio del actor en la Policía Nacional, del 1 de julio de 1976 al 3 de enero de 1979, esto es, **131 semanas**.

Respecto a las inconsistencias en la historia laboral del demandante en Colpensiones, relacionadas en el numeral 6.3 de los hechos de la demanda, revisada la historia laboral, se advierte que, efectivamente, en el ciclo de diciembre de 1995, si bien se reportaron 27 días, solo figuran como cotizados 26, por lo que debe contabilizarse **1 día** más en ese periodo; con relación al ciclo julio de 1996, si bien en ese ciclo no aparecen días reportados ni cotizados, sí hay novedad de retiro, aunque no se indique el día preciso de éste, por lo que no se deben tener en cuenta 30 días en ese periodo, como concluyó la a quo, sino **14 días**, en consideración a que el IBC reportado fue de \$90.013 y la cotización pagada fue de \$12.152, pago que, según la anotación

allí indicada, fue aplicado a períodos anteriores, lo que no es de recibo, como claramente precisó la falladora de primer grado (prohibición de imputación de pagos), resaltando la sala que en ese período el demandante pidió en la demanda que se le contabilizaran 19 días, lo que reafirma la conclusión a que llega la colegiatura al respecto. Sobre el ciclo de noviembre de 1998, le asiste razón al demandante en el sentido que se deben contabilizar **25 días** más, pues se reportaron 30 días, y Colpensiones solo tiene en cuenta 5 días cotizados; y, por último con relación a abril y mayo de 2001, se reportaron 30 días en cada mes y solo se tuvieron como cotizados 29, por lo que deben tenerse en cuenta **2 días** más; todo lo anterior para **un total de 42 días, que equivalen a 6 semanas** a contabilizar, no 8,29 como indicó la a quo..

En ese orden de ideas, el actor cuenta con **988.71 semanas** para el 31 de diciembre de 2014, no con 992, 4, como indicó la Juez de primera instancia, por lo que, para la contabilización de semanas se tomará dicho número para efectos de acreditar el requisito de densidad de semanas, pues, a pesar que el recurrente no cuestiona ese punto, lo cierto es que, por tratarse de Colpensiones, entidad en cuyo favor se tiene establecido el grado de consulta en todo lo que le sea desfavorable, es posible modificar ese tópico.

Es pertinente señalar que la censura pretende que se tenga en cuenta el período comprendido entre el 10 de febrero de 1989 y 28 de marzo de 1989 tiempo que indica laboró el actor para el empleador Joaquín Mesa Ochoa, y que no tuvo en cuenta la a quo, que para él corresponde a 48 días, esto es, 6,857 semanas.

Al respecto, ha de indicarse que este empleador figura en la historia laboral realizando cotizaciones para el actor en el período comprendido entre el 24 de septiembre de 1986 al 19 de noviembre de ese mismo año (8,14 semanas) luego figuran diferentes empleadores, observándose en el resumen de semanas de Colpensiones, visible a folios 54, que tal periodo no se incluye, y, se reporta al empleador Construcciones Perven realizando cotizaciones del 13 de octubre de 1998 al 3 de noviembre de 1988 e inmediatamente después el empleador José Jaime Calle Cor, cotizando el período 28 de marzo de 1989 al 5 de abril de 1989. No obstante, a folios 56, en el detalle de pagos efectuados

anteriores a 1995, se incluye al empleador Joaquín Mesa Ochoa, con el ciclo del 10 de febrero de 1989 al 28 de marzo de 1989, indicándose en la casilla de días reportados -47, con la anotación “Período en mora por parte del empleador”, y a folio 65, en la historia laboral tipo CAN, Colpensiones registra, respecto del empleador Joaquín Mesa Ochoa, lo siguiente:

Novedad	Fecha	Día	Salario	T.A	Seguros	Nnc	Aud	E	Inc
Ingreso	1989/02/10	14	\$39.310	1	P.S.R	0			1Deu.
Retiro	1989/03/28	28	\$39.310	1	P.S.R	0			1Deu

Para la Sala, el hecho que este ciclo, por parte del empleador Mesa Ochoa, no tenga pago alguno por concepto de cotización con anterioridad o posterioridad a dicho período, no da certeza de la existencia de una relación laboral que lo soporte, como concluyó la a quo, pues bien pudo tratarse de la omisión de retiro de dicho empleador, respecto de la relación laboral con el actor en el año 1986, donde sí se efectuaron cotizaciones, por lo que le correspondía al demandante acreditar dicha relación laboral con el señor Mesa Ochoa, lo cual no ocurrió en el proceso

Así las cosas, al contar el actor con menos de 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, ya que solo cuenta con 335 aproximadamente, hecho que no discute el actor, tampoco acredita las 1000 semanas exigidas en el decreto 758 de 1990, pues solo contabiliza **988.71 semanas** para el 31 de diciembre de 2014, como se anotó.

Ahora, si en gracia de discusión se admitieran las 992.4 semanas que encontró acreditadas la a quo, y se sumaran los 48 días que aduce el actor se encuentran en mora por el empleador Joaquín Mesa Ochoa, que equivalen a 6,857 semanas, alcanzaría 999,257.

En cuanto a la aplicación del criterio jurisprudencial de “aproximaciones de semanas de cotización”, que pide el actor se tenga en cuenta en este

proceso, recuerda la colegiatura lo dicho por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al respecto, en la Sentencia SL526 de 2021, del 24 de febrero, Radicación N.º 775140:

*En efecto, esta Corporación, en situaciones en las que son muy pocos los días para alcanzar las semanas mínimas para dejar causado el derecho pensional, como en sentencias CSJ SL, 26 oct. 2010, rad. 37500, reiterada en la CSJ SL, 30 ag. 2011, rad. 42029, enseñó:*

*En criterio del impugnante la cifra debe ser aproximada al entero siguiente, para que se entienda satisfecha la exigencia legal.*

*Sobre el punto de derecho en discusión, la jurisprudencia de la Sala tiene establecido que cuando como aquí ocurre, la fracción de semanas de cotización supera el 0.5, por razones de justicia y equidad, la cifra debe ser aproximada al entero siguiente, para evitar dejar en el desamparo al afiliado o a sus beneficiarios, por faltar una cantidad ínfima para cumplir el requisito legal de número mínimo de cotizaciones.*

*Lo anterior conduce a que las 25,57 semanas de cotización efectuadas por el demandante en el año inmediatamente anterior a la invalidez, se aproximen a 26, cumpliéndose así el requisito que exige el literal b) del comentado artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, aplicable a esta controversia, para que acceda a la prestación periódica por ese riesgo. Para ilustrar la posición de la Corte sobre el tema basta remitirse a la sentencia de 8 de abril de 2008, rad. N.º 28547 donde dejó estas enseñanzas:*

*“Bien se ha señalado por la doctrina que la equidad no es nada distinto de la justicia en el caso concreto y, si bien, el Sistema de Seguridad Social no se erige en un mecanismo de beneficencia ni de asistencia social, el resultado denegatorio de una pensión de sobrevivientes, perteneciente al mismo, por un faltante de 0.29 centésimas de una cifra, ciertamente que habilitaban al juzgador para ponderar adecuadamente la tensión resultante de la literalidad normativa con la equidad como criterio auxiliar, dentro del marco de la calidad de Estado Social de Derecho insuflado a Colombia por la Carta de 1991.*

*“Y esa ponderación se torna imperativa porque, a diferencia de lo expuesto por la censura sobre la presunta actitud del conglomerado social respecto de las previas reglas fijadas para dispensar las prestaciones propias del Sistema de Seguridad Social Integral, una solución denegatoria, en el caso de la pensión de sobrevivientes, con compañera permanente e hijo involucrados, bajo el adusto y lapidario argumento de la aplicación ad litteram de la preceptiva en cuestión, lo que genera es un sentimiento de reprobación social ante el despropósito al que se llega, ya que es ostensible la vastísima desproporción entre los perjuicios trascendentes generados para quienes son excluidos de los*



*beneficios del sistema por el írrito guarismo, con los presuntos que recibe el sistema al dispensar la prestación bajo las especialísimas circunstancias del sub lite.*

*“Y, la solución dada a la ponderación de las tensiones indicadas, estima la Sala, evita una manifiesta inequidad jurídica que, ciertamente, el legislador habría impedido, de haberlo podido prever, mas, ante el carácter falible del ser humano que le restringe la posibilidad de avizorar la totalidad de la casuística futura, corresponde entonces al dispensador de justicia, en cada caso concreto, hacer actuar el derecho de una manera cuidadosa y prudentemente balanceada, ya que, como se ha dicho, no hay peor injusticia que la cometida so pretexto de administrar justicia.*

*“A la misma solución asumida por el Tribunal ha tenido que arribar la Corte, y por similares motivaciones, en pos de conjurar soluciones que se divorcian del sentido de equidad que debe permear cada decisión emitida, y a las que la existencia de los casos referenciados por el censor, antes que abrirles paso, han de cerrárselo para evitar su repetición, consolidación o justificación en el ámbito judicial; así, en sentencia (de instancia) de 17 de agosto de 2006, radicación 27471, en la que, además, se fijó el necesario tope de afinamiento echado de menos por la censura en el fallo gravado, se dijo:*

*‘ ...dicho señor estuvo afiliado a la entidad demandada para los riesgos de I.V.M., habiéndole cotizado hasta el 28 de febrero de 1998, un total de 381 semanas (folios 3), de las cuales 299.8571, fueron sufragadas antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993; que deben aproximarse a las 300 exigidas por el artículo 6°, literal b) del referido Acuerdo, pues estima la Sala, que en todos aquellos casos, que como en el presente el decimal es superior a 0.5, por razones de justicia, equidad y por tratarse de una prestación de la seguridad social, cabe aproximarse tal como ya se había adoctrinado en sentencia de casación del 4 de diciembre de 2002, con radicación 18991, en la cual expresó:*

*‘En estas condiciones no se equivocó el Tribunal al tomar en cuenta las semanas aportadas por el causante entre el 1° de febrero y el 31 de julio de 1998 para establecer que el total de días cotizados por éste, en el último año anterior a su fallecimiento ascendió a 181 días equivalentes a un total de 25.85 semanas, que estimó debía aproximarse en aras de la equidad a 26 semanas teniendo presente que el decimal es superior 0.5.’”.*

*Por las razones anteriores, los cargos prosperan y el fallo del Tribunal será casado en su integridad.*

*En instancia se ha de precisar que el demandante a quien se le dictaminó incapacidad laboral del 72,40%, estructurado el estado de invalidez el 17 de diciembre de 1997, no encontrándose en ese momento cotizando al sistema sufragó 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la invalidez, -por cuanto las 25,57 semanas de aportes deben ser aproximadas como se indicó en sede de casación-, por lo que consolidó el derecho a la prestación deprecada”.*

Teniendo en cuenta dicha directriz, concluye la Sala que tampoco en este supuesto que en gracia de discusión se plantea (999,257), el actor tiene derecho a la pensión de vejez deprecada, pues la fracción de semanas de cotización, 0,257 no supera el 0.5, lo que impide aproximar al siguiente decimal, sin que sea de recibo lo aducido en el recurrente en cuanto a la comparación que hace de las diferentes clases de pensión (vejez, invalidez, sobrevivencia) para efectos de establecer un porcentaje que permita la aproximación de semanas que solicita, pues tal criterio jurisprudencial se aplica de igual forma para todas ellas, sin distinción alguna.

Por todo lo anterior, se impone **CONFIRMAR** íntegramente la sentencia de primera instancia que se revisa en Apelación, condenando en costas en esta instancia al demandante, a favor de la pasiva, al no haber prosperado el recurso interpuesto, dentro de las cuales se fija como agencias en derecho 1/2 SMMLV para el año 2021.

#### **VIII. - DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

#### **RESUELVE:**


**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia objeto de apelación, de origen y fecha conocidos, según lo expuesto en precedencia.


**SEGUNDO: COSTAS** en esta instancia a cargo del demandante y en favor de la entidad accionada, dentro de las cuales se fija como agencias en derecho 1/2 SMMLV para el año 2021.


**TERCERO:** En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

Se ordena la notificación por **ESTADOS** de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

**Los Magistrados:**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N ° 054 del 5 de abril de 2021.

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>